

**TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR:** Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las catorce horas con ocho minutos del día ocho de septiembre de dos mil dieciocho.

Los días cinco de enero, cinco de febrero y cuatro de mayo de dos mil dieciséis se recibieron escritos firmados por el licenciado [redacted], en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de [redacted], mediante los cuales, en el primero, se muestra parte en la calidad antes mencionada e interpone la excepción de improponibilidad sobrevenida y en los demás, señala medios para recibir notificaciones.

Además el día siete de septiembre de dos mil dieciocho se recibió escrito firmado por el mismo licenciado mediante el cual sostiene que no ha recibido ningún tipo de instrucciones que le permitan intervenir en debida forma, lo que le imposibilita cumplir las facultades de su mandato, por lo que de conformidad a los arts. 1923 ord. 4º del Código Civil y 73 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) renuncia voluntariamente a la representación que ejercía en nombre de las sociedades [redacted], y/o [redacted]

I. El licenciado [redacted] en su escrito de fs. 29 solicita la terminación anticipada del procedimiento con base al art. 127 del CPCM, pues en síntesis manifiesta que la consumidora para poder rescindir el contrato y ejercer el derecho de retracto debía informarlo en el período de ocho días después de haberse realizado el acto, por lo que aduce que la denunciante no hizo uso en tiempo del derecho de retracto antes mencionado, por lo que la tipificación de los hechos atribuidos a su mandante se hicieron de forma extemporánea y de continuar con el presente procedimiento se violaría el derecho constitucional de seguridad jurídica.

II. En este estado del procedimiento y conforme al principio de legalidad consagrado en la Constitución de la República, este Tribunal se encuentra obligado a realizar las siguientes consideraciones:

**A. Sobre la Potestad Sancionatoria del Estado.**

La Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia –v.gr. la sentencia de fecha 13-VII-2011, en el amparo 16-2009– ha reconocido que el *derecho a sancionar* del Estado, entendido como la capacidad de ejercer un control social coercitivo ante lo tipificado como *ilícito*–esto es, en sentido amplio, las conductas constitutivas de infracciones penales o administrativas que atentan contra bienes o intereses jurídicamente protegidos–, no sólo se manifiesta mediante el juzgamiento de los



delitos e imposición de penas por parte de los tribunales penales, sino también cuando las autoridades administrativas ejercen *potestades sancionadoras*.

En efecto, si bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Constitución, corresponde única y exclusivamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas, la autoridad administrativa, amparada en el ejercicio de dicha potestad, puede *sancionar* “mediante resolución o sentencia y previo el debido proceso las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas”.

Así, sobre la base del art. 79 de la Ley de Protección al Consumidor –en adelante LPC-, el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor tiene la facultad de intervenir punitivamente en la esfera jurídica de las personas jurídicas o naturales, públicas o privadas, que al dedicarse a la producción, distribución, suministro y comercialización de bienes y servicios, han provocado una lesión o daño en bienes o intereses –de orden colectivo o individual– considerados como fundamentales en la esfera jurídica del consumidor, siempre que tales comportamientos se encuentren tipificados en el referido cuerpo normativo como infracciones.

En efecto, la *potestad administrativa sancionadora* de la que está investido este Tribunal, tiene fijados sus fines, postulados y principios rectores a partir de la configuración que de la potestad punitiva realiza la Constitución; de tal forma que la valoración de los hechos e interpretación de las normas que éste ha de realizar se sujeta, en esencia, a una serie de principios, cuyo respeto legitima la imposición de la sanción. Entre estos postulados pueden mencionarse: el principio de legalidad, lesividad del bien jurídico, culpabilidad y la garantía de prohibición del doble juzgamiento, entre otros, los cuales, en su conjunto, han sido denominados como el programa penal de la Constitución.

Respecto al *principio de legalidad* en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, en la sentencia de fecha 20-I-2012, en el amparo 47-2009, se sostuvo que este postulado constituye una garantía política del ciudadano, en el sentido de no ser sometido a sanciones que no hayan sido aprobadas previamente, evitando así los abusos de poder. En razón de ello, se exige que la ley establezca en forma precisa las diversas conductas punibles y las sanciones respectivas.

En ese sentido, el mencionado principio tiene implicaciones en el proceso de elaboración y aplicación de la LPC en la que se prevén las infracciones cometidas en la relación de consumo, en la medida en que éste impone las siguientes condiciones: *i)* la ley material en la que se regulan tales infracciones debe ser previa al hecho enjuiciado; *ii)* debe ser emitida exclusivamente por la Asamblea Legislativa y bajo el carácter de ley formal; *iii)* los términos utilizados en la disposición normativa han de ser claros, precisos e inequívocos para el conocimiento de la generalidad, lo cual

comprende un mandato de determinación o taxatividad que ha de inspirar la tarea del legislador; y iv) la aplicación de la ley ha de guardar estricta concordancia con lo que en ella se ha plasmado, evitando comprender supuestos que no se enmarcan dentro de su tenor.

B. En el caso en análisis, la señora \_\_\_\_\_ manifestó que recibió una llamada telefónica haciéndole una invitación a un almuerzo en "Hotel \_\_\_\_\_", en el cual le ofrecieron servicios diversos que podría gozar si firmaba el contrato por siete años, cargándole inmediatamente a su tarjeta de crédito la cantidad de novecientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (\$975.00).

Según la resolución de las once horas con veintiún minutos del día treinta de julio de dos mil catorce, la denuncia de la señora \_\_\_\_\_ fue admitida e iniciado el procedimiento sancionatorio en contra de la sociedad \_\_\_\_\_ por la posible comisión de la infracción prevista por el art. 43 letra e), en relación con el art. 24 ambos de la LPC por no prestar los servicios en los términos contratados.

Es en este punto en el cual resulta pertinente realizar nuevamente el examen liminar de los hechos planteados por la denunciante y ver si estos encajan en la infracción imputada o en otra contenida en la normativa de consumo, la cual sea atribuible a la proveedora denunciada, previo a esto consideramos pertinente hacer algunas consideraciones sobre el principio de tipicidad.

La Sala de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado sobre el principio de tipicidad en los siguientes términos: "... el principio de tipicidad comporta la imperiosa exigencia de la predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos -lex previa- que permitan predecir con el suficiente grado de certeza -lex cerca- aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la aneja responsabilidad y a la eventual sanción." (SCA, Ref. 286-2007 de 12-VII-2013).

En el derecho administrativo sancionador la ley debe definir las conductas que son objeto de infracciones administrativas y aquellas sanciones a imponer, esto es sumamente importante por considerarse que en la mayoría de casos las sanciones son supuestos de limitación o restricción de derechos fundamentales.

Ahora bien, en la misma sentencia la Sala señala: "El denominado juicio de tipicidad alude a la adecuación de la conducta observada por el supuesto infractor de la norma jurídica, con los elementos descriptivos de un determinado tipo infractor".

Continúa la sentencia: "Al momento de realizar tal adecuación normativa, las autoridades administrativas sancionadoras se encuentran estrictamente sujetas a los tipos punitivos, de forma



*que no pueden ejercitar la potestad sancionadora respecto de comportamientos que no se hallen contemplados en las normas que los tipifican, y, tampoco, imponer sanciones que no sean las normativamente típicas, incluso, aunque aquellos comportamientos o estas sanciones puedan parecerse en alguna medida a los que dichas normas punitivas sí contemplan”.*

En la LPC, TÍTULO II “INFRACCIONES Y SANCIONES”, el art. 40 establece que las infracciones a la ley serán sancionadas administrativamente, en los casos y en la forma que se regula en la misma. Las infracciones se encuentran determinadas del art. 42 al 44, las cuales están calificadas de leves, graves y muy graves, cuyas sanciones están reguladas en sus arts. 45, 46 y 47.

Ahora bien, el art. 43 letra e) de la LPC, establece como infracción grave el no entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados.

Trasladando las consideraciones anteriores al presente caso, se advierte que los hechos narrados por la consumidora denunciante no se adecuan a la conducta liminarmente imputada y descrita en el art. 43 letra e) de la LPC, puesto que el reclamo de la denunciante no se refiere en ningún aspecto a la prestación de los servicios brindados por la proveedora denunciada.

Es así que de lo descrito por la consumidora solamente es posible evidenciar una inconformidad con el cobro realizado por la proveedora denunciada, no así indicios de algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales o la configuración de otra conducta sancionable en la LPC. En ese sentido, al no integrarse los elementos descritos en el tipo, nos encontramos frente al aspecto negativo llamado atipicidad.

De esta manera, al encontrarnos frente a hechos atípicos los cuales no puede ser adecuados a ningún tipo de infracción en materia de consumo, resulta necesario revocar las resoluciones de fs. 22, 25 y 27 y declarar improponible la denuncia presentada por la señora

— contra la sociedad

**III.** Respecto a la terminación anticipada alegada por el apoderado de

., resulta inoficioso pronunciarse por las razones expuestas en el romano II de la presente resolución.

**IV.** En relación a lo manifestado por el licenciado \_\_\_\_\_ agregado a folios 36 sobre la renuncia voluntaria a la representación es necesario mencionar que en base a lo establecido en el art. 73 numeral 2° del CPCM (de aplicación supletoria en el presente proceso) resulta necesario prevenir a la sociedad \_\_\_\_\_ para que nombre nuevo procurador.

**V.** De conformidad a lo anterior y según lo dispuesto en los artículos 97 de la LPC, 94 del Reglamento de la LPC, y 277 del CPCM, este Tribunal **RESUELVE:**

a) *Tener por parte a la proveedora* por medio de su  
apoderado general judicial con cláusula especial licenciado por contestada  
la audiencia conferida a la proveedora en los términos expuestos en el escrito de fs. 29 y por  
agregada la documentación de fs. 31 al 33.

b) Prevenir al licenciado estarse a lo dispuesto en el artículo 73  
numeral 2º del CPCM, en el sentido que no podrá abandonar la representación antes de que se  
provea la designación de otro procurador dentro del plazo de diez días.

c) Prevenir a la sociedad , para que designe nuevo procurador  
o intervenga a través de su representante.

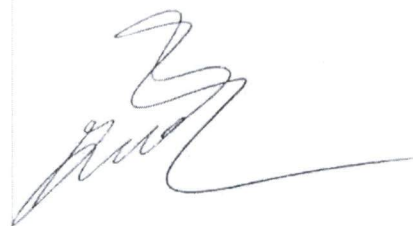
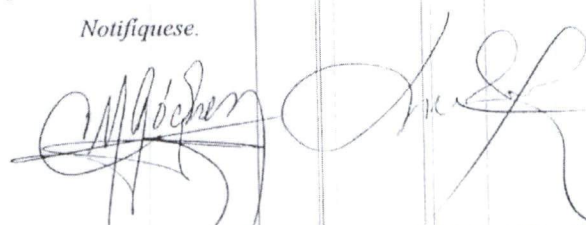
d) Revocar por contrario imperio las resoluciones de las once horas con veintiún minutos del  
día treinta de julio de dos mil catorce, de las ocho horas y cuarenta y siete minutos del día doce de  
octubre de dos mil quince y de las ocho horas con cincuenta y dos minutos del día doce de octubre  
de dos mil quince, por las razones expuestas anteriormente.

e) Declarar improponible la denuncia interpuesta por la señora )

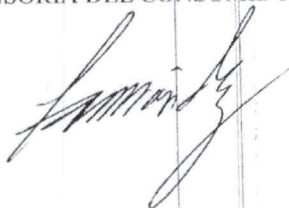
contra por los fundamentos legales antes expuestos.

f) *Tomar nota* del lugar, número de fax y correo electrónico señalados por el apoderado de la  
para recibir notificaciones, así como de las personas comisionadas  
para tal efecto.

*Notifíquese.*



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA  
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LO SUSCRIBEN.



K/ym

